

Ecuador acelera su apertura petrolera de cara a la transición energética

Quito ha impulsado reformas que permiten la venta de campos estatales, ya que el presidente Lasso ve al sector privado impulsando su promesa de duplicar la producción de petróleo

Ecuador está acelerando la apertura de su industria petrolera estatal a través de reformas rápidas diseñadas para lograr que el sector privado aproveche la mayor cantidad posible de recursos antes de que el mundo lo rechace.

En virtud de un decreto fiscal general que entró en vigor el 29 de noviembre, las reformas a la legislación de hidrocarburos permiten al gobierno licitar campos de petróleo y gas natural operados por la estatal PetroEcuador y facilitar la migración de unos 20 acuerdos de servicios basados en tarifas a contratos de producción compartida (PSC). Las reformas proporcionan un marco para las subastas de dos activos maduros operados por PetroEcuador, el campo petrolero Sacha de 65.000 b / d y el campo de gas de aguas someras Amistad de 25 millones de pies cúbicos / d (258 millones de m³ / año), en la segunda mitad de 2022. El ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, dice que cinco firmas están interesadas en el campo Amistad.

El presidente Guillermo Lasso, quien asumió el cargo en mayo, se comprometió ambiciosamente a duplicar la producción de petróleo a 1 millón de b / d durante su mandato de cuatro años. Ecuador produce alrededor de 485.000 b / d de crudo ácido medio y pesado. Lasso visualiza al sector privado al frente de la industria petrolera para permitir que el estado se concentre en la salud, la educación y otras prioridades sociales.

Los contratistas de PetroEcuador, incluidos los gigantes de servicios estadounidenses Halliburton y Schlumberger, Sinopec controlada por el estado de China, la independiente canadiense Canacol y la firma nacional Sertecpet, tienen 90 días para notificar a la compañía de su intención de convertirse a PSC y comenzar las negociaciones. Los contratos, que en su mayoría se remontan a la administración nacionalista de recursos del ex presidente Rafael Correa de 2007-17, pagan una tarifa de \$ 20-30 / bl por producción incremental. Pero durante los últimos seis años, PetroEcuador ha suspendido y renegociado algunos de los acuerdos debido a los cambios en los precios mundiales del

petróleo, lo que generó conflictos que llevaron al arbitraje con Schlumberger y Halliburton el año pasado.

Dos firmas ya han expresado su interés en migrar sus contratos a los PSC, y las negociaciones podrían comenzar en enero, dice Bermeo. Pero no está claro si las empresas extranjeras de servicios ambientales, sociales y de gobernanza están interesadas en participaciones accionarias. “No hay ningún incentivo para que las empresas privadas inviertan bajo un contrato de servicio porque la empresa recibe una tarifa sin importar lo que haga”, dice Bermeo. “Queremos que los PSC sean un incentivo para invertir. Por lo tanto, cuanto más crudo produce una empresa, más ganancias obtiene”. Los contratos estarán vinculados a los precios internacionales del petróleo, el volumen de reservas, los planes de desarrollo y la duración del contrato, agrega.

Ecuador también está abriendo su mercado downstream, con nuevos contratos de importación de combustible y planes para subcontratar la refinería Esmeraldas de 110.000 b / d de PetroEcuador.

Cartilla amazónica

Los esfuerzos impulsados ??por el clima para acelerar la transición de los combustibles fósiles, combinados con las demandas sociales de la era de la pandemia, están impulsando a países dependientes del petróleo como Ecuador a endulzar los términos de inversión. Pero los reflejos nacionalistas apenas se han disipado. Los sindicatos petroleros rechazan las reformas. Y el abogado de contratos petroleros Luis Calero dice que son inconstitucionales. Pero el veterano analista local Walter Spurrier sostiene que las reformas brindan una base legal más sólida para la inversión privada necesaria para extraer petróleo. “En unas pocas décadas, esas reservas de crudo no tendrán valor, considerando las políticas globales actuales que favorecen las energías renovables sobre los combustibles fósiles”.

Desde el exterior, la presión para detener la perforación es cada vez más aguda. Los grupos ecologistas Stand Earth y Amazon Watch han hecho campaña con éxito para evitar que algunos bancos de la UE proporcionen financiación comercial para el petróleo de los campos petroleros de la Amazonía ecuatoriana. Las organizaciones no gubernamentales dicen que la mayor parte del petróleo amazónico va a California, destacando a las refinerías Marathon, Valero y Chevron, y piden que no se expanda la explotación petrolera en la selva amazónica, ya sea en Ecuador,

Perú o Colombia.

Con información de La Patilla